

los americanos ilustrados y que se respetan á sí mismos, no participen en las labores de los partidos políticos con los cuales votan; al contrario, la existencia del mal crea un deber claro y urgente para la conciencia y para el patriotismo de todo americano, y ese deber es tomar parte en la labor activa del partido y hacer que su organización sea lo que debe ser.

Todo ciudadano inteligente debe estimular en su propia comunidad social á todos los votantes del partido en quienes tiene confianza, para que se hagan cargo de sus propios negocios y para substituir con una organización y una dirección que en realidad los representen, la organización y dirección que se sostienen buscando y distribuyendo empleos.

## IV.

## LOS FUNDAMENTOS PARA ESPERAR MEJORES RESULTADOS.

La tercera de mis conferencias hizo ver los males que resultan cuando un grupo que no tiene más objeto que comerciar con los empleos públicos, usurpa el manejo y dirección de los partidos políticos, que se inspiran en legítimos propósitos, así como los deberes que incumben á los ciudadanos para acabar con tal usurpación.

Semejante tarea es fácilmente practicable. Dudar que esto pueda hacerse, es dudar de la capacidad de nuestro pueblo para gobernarse por sí mismo; porque el cambio requiere tan sólo la voluntad de cumplir con los deberes de ciudadano, que es esencial para el ejercicio del gobierno popular. Es verdad que no puede obtenerse de una manera inesperada ó sin esfuerzos sistemáticos y continuos ó por meras exhortaciones y súplicas; sino que debe venir poco á poco y á medida que se lleva á cabo el desarrollo político. No es de esperarse que los



hombres que toman parte en la organización de los partidos lleguen á ser altruistas por modo súbito. El mal con que habrá de lucharse es el propósito decidido de los viejos organizadores de los partidos políticos para garantizar sus intereses y esto no puede vencerse con el solo deseo de oponerse á él. Se necesita que los votantes de los partidos den muestra de una voluntad más fuerte para asegurar intereses más poderosos. Para que funcione este antiguo sistema, que tiene por base acaparar empleos, no es necesario dar á los miembros del partido dominante aquellos cuyos deberes se relacionan con el cumplimiento de la política del partido; porque, al contrario, tiende á cubrirlos con hombres indiferentes á dicha política y que no obedecen, en realidad, sino á sus propios intereses personales. En cambio la destrucción del sistema no excluye tampoco de los empleos á los que trabajen por el partido, pues solamente los priva del derecho á ellos, cuando no pueden justificar ese derecho ante la opinión pública.

Este maléfico sistema está ya bastante reducido en su objeto y en sus facultades. El método moderno para hacer los nombramientos en los servicios civiles ha retirado del antiguo comercio de

empleos un gran número que, aunque de poca importancia, aisladamente, la tienen muy grande en su conjunto. El Gobierno de nuestras Posesiones Insulares se ha establecido y mantenido sin ninguna consideración á las deudas políticas que los partidos contraen. No se toman en cuenta para los nombramientos en el ejército y en la armada la afiliación ó los servicios prestados al partido. El último año se ha reglamentado de nuevo el servicio consular, y sus puestos más elevados serán cubiertos por ascensos debidos á las aptitudes, y los inferiores se cubrirán por medio de exámenes. Las oficinas de correo de cuarta clase se han reglamentado también de nuevo, de tal modo, que la permanencia en los empleos depende más bien del mérito del empleado que de los favores políticos de que disfruta. Así pues, en el negocio de empleos, el número de éstos se ha reducido considerablemente.

En los servicios federales, la teoría de pagar las deudas políticas con empleos se ha debilitado mucho y tiende á desaparecer. El deseo, que cada vez se hace más general, de implantar el sistema de elecciones primarias directas, indica la resolución de los votantes, de asegurar en la selección de candidatos, la real expresión de sus propias volunta-



des. Basta continuar este movimiento ya iniciado para librar á todos estos servicios públicos de los efectos de las falsas organizaciones que los oprimieran, como el «Viejo del Mar» el cuello de «Sinbad el Marino,» para hacer las organizaciones de nuestros partidos, como ya lo son en algunos lugares, realmente representativas, y para lograr que los directores de los partidos sólo deban su posición, como acontece en algunos Estados, á la superioridad de sus opiniones, á la confianza de la comunidad social, á su sabiduría política y á su mayor habilidad para precisar y sostener los principios y la política de sus partidos.

Yo estoy convencido de que en el ancho campo del gobierno popular el optimismo es un deber del ciudadano, y el pesimismo una criminal debilidad. Si cada uno ha de juzgar el mundo y la conducta de los hombres sometiéndolos á una regla de perfección ideal, sin duda que todo se hallará malo; pero si nos preguntamos si el mundo ó cualquier pueblo de los que en él existen es bueno ó malo, honrado ó perverso, tendremos necesidad de reconocer que hay, en una proporción bien penosa por cierto, errores y egoísmos, injusticias y crueldades, indiferencia é ignorancia.

La verdadera cuestión, sin embargo, no es sa-

ber lo que el mundo es, sino cuáles son sus tendencias. ¿Marcha hacia el bien ó hacia el mal? ¿El nivel moral tiende á elevarse ó á descender? Señalemos las condiciones y el carácter de los pueblos civilizados por muchos siglos y generaciones sucesivas, y veamos si la libertad y la justicia y la honradez han ganado ó han perdido; si la instrucción pública ha avanzado ó retrocedido; si los hombres son más ó menos inteligentes, si han llegado á ser más crueles ó bondadosos, más egoístas ó desinteresados; si los gobiernos son más puros ó más corrompidos; si las leyes son más ó menos justas ó más ó menos respetadas, y entonces sabremos si debemos enderezar nuestros pasos hacia el futuro llenos de fe y de esperanza ó con temor y desaliento.

Vosotros hallaréis que tal estudio trae consigo una respuesta alentadora acerca de las condiciones y probabilidades de éxito del gobierno popular.

No hay un sólo elemento de carácter, de aptitud ó de práctica de los que contribuyen á que un gobierno sea lo que debe ser, en que no se haya verificado un adelanto firme y estable, al desarrollarse progresivamente el gobierno democrático. Es imposible leer algo de lo que se refiere á la vida de los pueblos en el mundo civilizado durante cualquiera de los últimos siglos, sin hallar que hoy ha



desaparecido una pasmosa suma de crueldad, de opresión, de inmoralidad, de corrupción y de privilegios.

Marcan los puntos de partida del progreso del gobierno popular, sin que sea necesario ir más allá de los primeros años del último siglo, la reforma de la ley inglesa por virtud de cuyos preceptos se castigaban con pena de muerte más de doscientos delitos; la lucha en favor de la emancipación católica, y la revolución llevada á cabo en la representación parlamentaria, que destruyó en Inglaterra el viejo y podrido sistema, y transfirió el poder de la aristocracia de los terratenientes á la gran clase media.

Respecto de los primeros días del siglo XVIII, John Morley dice:

«Un examen ligero de la historia política de aquél tiempo, en tanto que sus condiciones no nos son conocidas, nos lleva á la conclusión de que Walpole no era el menos escrupuloso de los hombres de su tiempo.»

Y agrega:

«Es indudable que Walpole practicó lo que ahora llamamos corrupción parlamentaria; pero la conducta política debe ser juzgada á la luz de la historia política. No mucho antes de Walpole, cualquier

hombre estaba dispuesto á pagar algunos miles de libras por ser ministro, exactamente como los hubiera pagado en nuestro tiempo por ser nombrado coronel de un regimiento. Muchos años después de Walpole, Lorth North acostumbraba traficar con los empréstitos públicos; y sólo cuando el joven Pitt dió un ejemplo más elevado, los ministros se sintieron embarazados al reservarse una parte de dichos empréstitos, para distribuirla entre sus amigos privados. Comprar el voto de un miembro del parlamento era para un ministro menos vergonzoso que lo que en nuestro tiempo ha sido para un miembro del parlamento comprar el voto de un elector.»

Lecky dice de Walpole y de su tiempo:

«Gobernó por medio de una asamblea que estaba saturada de corrupción, aceptó plenamente aquella situación y resistió todo intento de mejorarla. Aparece haber admitido cordialmente la máxima de que el gobierno debe llevarse á cabo por medio de la corrupción ó de la fuerza, y deliberadamente hizo de la primera la base de su política. La corrupción sistemática de los miembros del parlamento se asegura que comenzó en la época de Carlos II, en cuyo reinado se traficó en gran escala; continuó en la época de sus sucesores, y el número de escándalos, más



bien de crímenes, se acrecentó después de la revolución. Sir J. Trevor, Presidente de la Cámara de los Comunes, fué considerado responsable de un gran crimen por haber vendido su voto á la ciudad de Londres en mil guineas. My Guy, Secretario del Tesoro, fué enviado á la Torre de Londres por haberse dejado cohechar para hacer el pago de los atrasos que se debían á un regimiento. Lord Ranelagh, pagador del ejército, fué destituido por haber dispuesto de los fondos que manejaba. Se demostró que, para facilitar la Ley del Mar del Sur, se habían creado grandes cantidades de acciones ficticias, las cuales fueron distribuidas entre los ministros de la corona y aceptadas por ellos. Aislabe, Canciller del Tesoro, fué destituido, enviado á la Torre de Londres y multado. El joven Craggs, que fué Ministro de Relaciones, probablemente se escapó de ser condenado, á causa de su muerte oportuna. Su padre, el Director General de Correos, evitó la averiguación por medio del suicidio, y graves sospechas recayeron sobre Charles Stanhope, Ministro de Hacienda, y sobre Sunderlan, que era jefe de gabinete. Cuando respecto de los directores de la política pueden citarse hechos semejantes, no debe sorprender que la inmoralidad fuese notoria entre los miembros menos distinguidos.»

Lecky dice también del mismo período:

«Los magistrados en muchos casos no sólo eran notoriamente ignorantes é indignos del puesto; sino que eran, como se les llamó, jueces comerciantes, de quienes Fielding dijo que jamás les eran indiferentes las causas que se sometían á su deliberación, sino cuando no podían obtener nada de alguna de las partes. El atrevimiento y el número de los ladrones se acrecentó al grado de que Londres ya no parecía una ciudad civilizada. Los rateros y los ladrones, dijo Smollett, hablando de . . . 1,730, llegaron á ser más audaces y más crueles de lo que antes lo habían sido. El Alcalde municipal de Londres en 1,744 dirigió al Rey una comunicación en la cual decía: «Diversas agrupaciones de gentes de malas costumbres, armadas con palos, bastones, cuchillos y otras armas peligrosas infestan no solamente las calles y lugares privados, sino las avenidas y las plazas frecuentadas por el público, cometiendo en ellas los más audaces ataques, robos y asesinatos contra los súbditos de Su Majestad, cuyos negocios los obligan á transitar por la ciudad; y estos actos se perpetran con frecuencia en horas que, hasta aquí, se habían considerado como de seguridad completa.» Las ladrones más hábiles, por algún tiempo, dominaron por completo



á las autoridades. «Las autoridades judiciales, escribió Fielding, me han asegurado que se habían encontrado con ellos, teniendo en sus bolsas órdenes para aprehenderlos, sin atreverse á hacerlo; y en verdad no se les puede censurar por no haberse expuesto á ser vencidos, porque es tristemente cierto que en esos días, tan pronto como un ladrón daba la alarma, dentro de ciertos límites, veinte ó treinta bandidos armados, estaban prontos á acudir en su defensa.»

En el mismo período, los caminos de Inglaterra estaban llenos de salteadores. Dick Turpin, Jonathan Wild y Jack Shepard compartían la admiración y la simpatía del pueblo con los atrevidos contrabandistas que libraban continua guerra en todas las costas contra los aduaneros del Gobierno. Las costumbres del país permitían y las leyes no evitaban el pillaje de los buques que encallaban en las costas. Las cárceles eran sucios focos de infección; casi nada se hacía en favor de los dementes, de los enfermos, de los heridos, y de los desamparados á causa de sus costumbres ó avanzada edad, y no se favorecía la enseñanza ó ilustración, á no ser la de los pocos afortunados que formaban la aristocracia de los terratenientes.

Cuando reflexionamos que esas condiciones exis-

tían en la época en que vivieron los hombres que firmaron la independencia americana, y las comparamos con las actuales, en medio del desarrollo de las mismas instituciones políticas y bajo el dominio de la misma raza en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el Canadá y en Australia, no podemos menos que comprender que la evolución del gobierno popular ha estado acompañada de un asombroso progreso, no sólo en la prosperidad material, sino en la honradez y en la aptitud para mantener el orden y la justicia, que conducen á la humanidad á una vida superior.

En nuestro propio país podemos tomar como término de comparación la ruptura vergonzosa de las condiciones de la rendición de Burgoyne y la negativa de los Estados á cumplir las condiciones del tratado de paz con Inglaterra para la protección de los «realistas»; la impotencia del Gobierno Continental que describió Charles Lee como «estúpida manada de ganado que tropieza á cada paso», los celos, las pequeñeces y las extrañas preocupaciones que estorbaron y casi arruinaron la obra de Washington; la incapacidad de la administración y, no su pobreza, á la cual se debió la derrota de Walley Forge, cuando las huellas de nuestros pobres soldados pudieron precisarse sobre la nieve,



no porque no tuvieron ni medias ni zapatos, sino porque las unas y los otros no se les habían entregado cuando se necesitaron.

Las experiencias humillantes de la segunda guerra con Inglaterra revelaron la ineptitud é incompetencia de la administración federal, las cuales hubieran sido ridículas, si no hubieran sido lamentables.

Ahora sería imposible elegir un Vicepresidente de los Estados Unidos como Aaron Burr y dejar el mando del ejército á otro Wilkinston, que se supo que recibía de España un pago anual de dos mil dólares, cuando discutíamos con aquel país la posesión de la Florida y cuyos amigos lo defendieron asegurando que el recibir dinero de España no significaba darle algo en cambio.

El estado de cosas que prevaleció en nuestro comercio en la época del Crédito Mobiliario no podría existir hoy. La atmósfera que se respiraba en Washington en aquel tiempo, permitió á un grupo de hombres de los más distinguidos y poderosos entre los servidores de la Nación, comprar y aceptar acciones de las sociedades respecto de cuyos intereses debían votar en una ó en otra cámara. La condición de los negocios, pues, era tal, que las gentes llegaron á perder el sentido moral. Aquellos mis-

mos hombres no podrían hacer hoy lo que entonces ejecutaron, porque ahora se vive en una atmósfera más transparente y es más elevado el nivel de la moralidad pública. Las circunstancias que hicieron posible que el infortunado Belknap, como Secretario de Guerra vendiese empleos, y que los colaboradores oficiales del Presidente fueran deshonrados á causa de los «fraudes del whiskey» en la segunda administración del Presidente Grant, afortunadamente ya no existen y no podrán volver á existir jamás.

La naturaleza de los males que ahora urgimos al Gobierno á que remedie, es una muestra del adelanto de la moral pública y de la eficacia de nuestro Gobierno; porque esos males consisten en su mayor parte en prácticas que pasaron inadvertidas antes, porque otras mayores no eran aún corregidas.

Hallamos un hermoso ejemplo de esto en una ley del Estado de New York, que se intitula «Ley que establece una Lotería para el adelanto de la Literatura y otros propósitos», promulgada en 13 de Abril de 1814. La ley comienza así:

«Considerando que los seminarios de enseñanza bien reglamentados son de gran importancia para todo el país y tienden especialmente por la difusión de la ciencia y por el progreso de la moral á



sostener y perpetuar las libertades de un Estado soberano, el pueblo del Estado de Nueva York, representado por sus dos cámaras resuelve: coléctese por medio de una Lotería, en sorteos sucesivos, una suma igual al monto de las asignaciones hechas por esta ley.»

La ley entonces señalaba 100,000 dólares en favor del Colegio de la Unión; 40,000 en favor del Colegio Hamilton; 40,000 para la Iglesia Africana de Asbury de la Ciudad de Nueva York, con el objeto de ponerla en situación de pagar una deuda y de establecer una escuela; 30,000 en favor del Colegio de Médicos y Cirujanos, y establecía, además, ciertas disposiciones en favor del Colegio de Columbia.

Existía la tradición entre los estudiantes americanos, en mi juventud, de que el Doctor Eliphalet Nott—*clarum et venerabile nomen*,—adquirió la parte que esta ley daba á las demás instituciones y obtuvo mucho más dinero para el Colegio de la Unión, independientemente de la lotería, debido en gran parte «á la difusión de la ciencia y al progreso de la moral.»

He pensado á menudo en los últimos años, cuando he visto á las gentes honradas apretarse las manos porque el gobierno no ha podido suprimir el

juego en sus varias formas, que el recuerdo del criterio existente en el año de 1814 demostró que la dificultad no consiste en la decadencia del gobierno, sino en el progreso de la moral; no en su imposibilidad para cumplir sus deberes tan bien como debieran ser cumplidos, sino en el mayor peso que constantemente se le impone para hacer que las restricciones que gravitan sobre la minoría del pueblo marchen á la par que las que voluntariamente acepta la mayoría.

Muchos ejemplos podrían hallarse de esta evolución. Las prácticas de los ferrocarriles que ahora se condenan tan amplia como justamente y que proporcionan fuente abundante de discusiones políticas, no son nuevas; más bien son prácticas viejas que antes pasaron inadvertidas. Las rebajas en las tarifas ferrocarrileras que ahora están prohibidas por la ley, y por las cuales las grandes compañías han sido castigadas, son únicamente una forma de las tarifas especiales que antes prevalecieron sin objeción alguna. Hace treinta años todos los ferrocarriles daban á los cargadores tarifas especiales; esta era la forma de la competencia, y la competencia no sólo no estaba prohibida sino que estaba prescrita por la ley, y todo acto enderezado á restringirla era ilegal, como ahora.



Dándole tarifas especiales, las compañías de ferrocarril indujeron al pueblo á construir fábricas, casas de matanza, depósitos de granos y una gran variedad de otros establecimientos á lo largo de sus líneas, y de esta manera favorecieron sus negocios y beneficiaron al país cuyos caminos atravesaron. En estos últimos años no obstante, la Nación ha llegado á comprender que esas grandes empresas á quienes otorgara el dominio eminente y la perpetua franquicia de servir los intereses públicos, no pueden conceder tarifas especiales á un hombre, sin perjudicar á otros; y que el derecho común del pueblo exige la igualdad de facilidades y de costo en el transporte que los ferrocarriles proporcionen, condenando los privilegios especiales concedidos á los unos, como dañosos para los otros. La lección que de todo esto se deduce es que los procedimientos instaurados por violación de la ley que prohíbe las tarifas especiales, casos de los cuales no se hablaba hace treinta años, no demuestran que estamos empeorando, sino mejorando, porque nuestro gobierno aplica ahora un criterio más elevado de justicia para el manejo de los negocios públicos.

Puede decirse lo mismo de las compañías y del manejo de valores, acerca de lo cual se ha llama-

do la atención recientemente por medio de las declaraciones rendidas ante la «Interstate Commerce Commission», con motivo de la organización del Ferrocarril de Chicago y Alton. Hace treinta ó cuarenta años, cuando la dirección de los ferrocarriles Erie y Atlantic, Great Western y Union Pacific atrajo la atención pública, lo que habían hecho sus directores era tan malo, que la conducta de los del Chicago y Alton no se hubiese tomado en cuenta. El hombre que se consagraba á arruinar á las empresas ferrocarrileras, era el verdadero tipo del director de ferrocarril. Una gran parte de nuestro pueblo creyó que este era un juego permitido por la ley, y los principios del juego, apenas se limitaron á excluir el robo ordinario, la estafa y el fraude. Desde entonces se ha establecido un criterio más elevado, que obliga á los directores de ferrocarril á observar una conducta más escrupulosa y, de acuerdo con ese criterio, hoy se condena lo que antes ni siquiera llegaba á notarse. Puede uno asegurar que la honradez y la probidad de los directores de las compañías del país son ahora mucho más elevadas de lo que antes lo fueran; y si en la actualidad hay más quejas que antaño, esto depende de que nuestro pueblo exige que las leyes y los tribunales se inspiren en reglas



de moral más rígidas y más severas que las que al principio se estimaron necesarias.

Las averiguaciones que los Ministerios del Interior y de Justicia han abierto contra los usurpadores de tierras en el Oeste, que se han apropiado las pertenecientes al gobierno, donde se hallan maderas, carbón y pastos, han despertado una intensa indignación entre sus defensores y amigos; porque el abuso era de tal modo inveterado, que habían llegado á creer que constituía un positivo derecho. Por más de una generación se ha juzgado cosa natural apoderarse de las tierras públicas, á tuertas ó á derechas, y cuando los empleados del gobierno han tratado de demostrar que privarlo ilegítimamente de sus tierras era tan poco honroso, como hacer lo mismo con los particulares, se estimó que esto era una tremenda injusticia. Un simple progreso del criterio moral es lo que de manera sencilla ha dado vida á leyes que antes se consideraban letra muerta. La administración del gobierno federal se ha levantado, pues, á un nivel moral más alto, como lo hiciera la administración inglesa después de los días corrompidos de Walpole.

El derecho de votar ha llegado á convertirse en una expresión más honrada de la voluntad popu-

lar. Solamente los hombres que hoy son ya viejos pueden recordar, porque la historia todavía no los registra de una manera adecuada, los grandes fraudes, los abusos de todo género y los actos de violencia que impedían hace cuarenta años que se llevaran á cabo elecciones honradas, antes de las leyes electorales de la federación de 1870 y 1871, leyes que aunque ya no están en vigor, han dejado huellas en la legislación de los Estados de la Unión. En aquéllos días, antes de que hubiese un registro de votos, los transeuntes podían vencer á los residentes en su domicilio, y el cómputo de los votos estaba á merced de cualquiera que lograba comprar á uno de los empleados de las elecciones locales. Las cédulas con que se votaba eran proporcionadas tan sólo por las juntas locales del partido, y eran impresas, dobladas, reunidas y distribuidas por sus agentes. He conocido votantes de un distrito para elecciones de diputados al Congreso, que fueron á las urnas en un día de elecciones y hallaron todas las cédulas distribuidas en favor de un candidato, sin poder obtener ninguna en favor de otro distinto, pues el jefe local de un partido había sido comprado por el contrario. Yo he visto filas de vagabundos salir de una casa de huéspedes con sus cédulas en la mano, manteniéndolas á la vista hasta el mo-